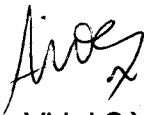


A LA MESA DEL CONGRESO

Al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, el **Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar**, presenta la siguiente **Proposición de Ley para la modificación de los requisitos de exigibilidad del reintegro de prestaciones indebidas de la Ley General de la Seguridad Social y la Ley del Ingreso Mínimo Vital**.

Madrid, Palacio del Congreso, a 12 de mayo de 2026



Aina Vidal Sàez
Portavoz adjunta primera



Lander Martínez Hierro
Diputado

ANTECEDENTES

- Constitución Española
- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
- Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas.
- Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La presente proposición de ley tiene por objeto responder a una necesidad urgente de reforma de los requisitos de exigibilidad de reintegro de prestaciones indebidas establecidos en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Esta medida debe adoptarse de manera urgente y se justifica en términos de justicia social, atendiendo la naturaleza de las prestaciones sociales de carácter económico en el ámbito de los derechos sociales y sus requisitos para acceder a ellas; la reclamación de la deuda, especialmente si se trata de una gran cuantía o prácticamente la totalidad de lo percibido, puede comportar un empeoramiento de la situación de vulnerabilidad de las familias y personas beneficiarias y, consecuentemente, comprometer la finalidad de la prestación.

Además, esta situación de vulnerabilidad de beneficiarios y familias suele verse agravada por la propia tramitación de los expedientes, ya que en estos momentos las entidades gestoras tardan meses, incluso años, en revisar la prestación y cuando lo hacen reclaman la devolución de todo el periodo.

II

La Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital entró en vigor con el objetivo principal de garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad económica para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, asegurando una renta mínima a quienes carecen de recursos económicos básicos, adaptándose a las circunstancias de cada unidad de convivencia.

Desde su implementación, como también ocurre con otras prestaciones no contributivas como las pensiones de invalidez o los subsidios de desempleo de larga duración, son muchos los beneficiarios que mientras percibían la prestación vieron incrementados sus ingresos, y consecuentemente, pasaron en muchos casos a superar los mínimos establecidos para ser receptores de estas. Y en este sentido, pese a estar obligados a informar a la Administración cuando reciban nuevos ingresos y realizar el trámite pertinente para su comunicación, las entidades gestoras en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, pueden tardar meses, incluso años, en revisar la prestación y cuando lo hacen reclaman la devolución de todo el periodo.

En concreto, en lo que respecta al Ingreso Mínimo Vital las personas beneficiarias de la prestación que vieron modificados sus ingresos están siendo contactadas para que devuelvan lo cobrado en los últimos años como perceptores del Ingreso Mínimo Vital. Se trata de familias sin recursos y en situación, a veces, de extrema necesidad, que percibieron esta prestación social, y que tienen serias dificultades para hacer frente a las cantidades que ahora se les reclaman.

Y es que recientes pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo consideran que se ha de entender como desproporcionado reclamar la integridad de lo cobrado, en concepto de prestaciones o ayudas asistenciales, cuando se haya podido comprobar la buena fe de los beneficiarios o cuando el error haya sido cometido por la propia Administración.

La sentencia del *Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del 26 de abril de 2018 en el caso Čakarević contra Croacia* establece que no se puede obligar a un ciudadano a devolver prestaciones indebidamente cobradas por error estatal, si se cumplen ciertos criterios. Estos criterios son: la buena fe del beneficiario (no conocía el error), la naturaleza de la prestación (como el desempleo, que cubre necesidades básicas) y que la devolución suponga una carga desproporcionada e individual para el afectado.

Esta resolución se argumentó en base al artículo 1 del Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho al disfrute pacífico de los bienes, y la obligación a la persona beneficiaria a devolver la totalidad de las prestaciones fue considerado una carga excesiva, y buscando un equilibrio justo entre el interés general y el derecho de propiedad individual, sin que la obligación de devolver una prestación indebida resulte en ningún caso desproporcionado.

Esta misma doctrina ha sido aplicada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Social en casos de pagos indebidos de prestaciones, como el de los trabajadores en ERTE por COVID, *STS 2072/2024* y *STS 2341/2024*.

Se debe tener en consideración que las actuales carencias y déficits del sistema de reclamación de los pagos indebidos en lo que respecta a su tramitación por parte de las entidades gestoras y la administración, y la exigencia de devolución de toda la prestación percibida por personas y unidades de convivencia vulnerables o en riesgo de exclusión podría también entrar en contradicción con lo dispuesto en los artículos 13.1, 15.3, 16, 17, 30 y 31 de la Carta Social Europea.

Por último, otra de las anomalías que debían corregirse en coherencia con lo anteriormente expuesto es la posible consideración de responsables solidarios en el caso de las prestaciones indebidas a los hijos e hijas, menores a cargo o personas en situación de vulnerabilidad que forman parte de la unidad familiar de las personas beneficiarias por la prestación del Ingreso Mínimo Vital. Y es que con el redactado vigente el artículo 19.2 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, quedan incluidas todas las personas que en virtud de hechos,

omisiones, negocios o actos jurídicos participen en la obtención de una prestación de forma fraudulenta.

Este hecho ha dado lugar, de facto, a una deuda heredada por los hijos menores, con el agravante de que se trata de unidades familiares en situación de vulnerabilidad, entrando además en contradicción con la actual doctrina del Tribunal Supremo establecida en resoluciones como la STS de 25/03/2021 Rec. cas. 3172/2019 reiterado en STS de 18/06/2021 Rec. cas. 2188/2020), donde resuelve no cabe exigir la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 42.2.a) LGT a un menor de edad en los supuestos en que la actuación que se le impute sea como causante o colaborador en la ocultación o transmisión de bienes, o resoluciones como la de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, Sec. 2.ª, 1640/2022, de 13 de diciembre. Recurso 404/2021 o la de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 4.ª, 989/2023, de 13 de julio. Recurso 6662/2022.

Pero la realidad es que a pesar de la doctrina aplicable todavía son muchos los casos en que la administración ha considerado a los hijos y menores a cargo que forman parte de la unidad familiar como responsables solidarios del reintegro de la prestación indebida en el caso del Ingreso Mínimo Vital, agravando así la situación de estas familias que en ocasiones acaban por acudir a la justicia.

III

La presente proposición de ley se estructura en dos artículos, una disposición adicional, una disposición adicional segunda y una disposición final.

El artículo primero modifica el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, añadiendo un punto 5 en el que se establecen los requisitos de no exigibilidad de las prestaciones recibidas, en consonancia con la realidad expuesta en la exposición de motivos y la doctrina establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo.

El artículo segundo modifica el artículo 19.2 de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, para establecer, tal y como nos marca la actual doctrina del Tribunal Supremo, de forma clara e inequívoca que en ningún caso los hijos menores o a cargo, podrán ser considerados como responsables solidarios del reintegro de prestaciones indebidas.

La disposición adicional primera establece los criterios de consideración de persona en situación de vulnerabilidad para la posterior aplicación de lo establecido en esta Ley.

La disposición adicional segunda se introduce para resolver la problemática referente a las prestaciones reclamadas a personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, convirtiendo de facto en *no exigibles* todas aquellas prestaciones reclamadas en aplicación de la *Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso*

mínimo vital, que a la fecha de entrada en vigor de la Ley no se hayan reintegrado o se encuentren en procedimiento de reintegro por parte de la administración.

Finalmente, la disposición final segunda regula la entrada en vigor de la ley, que tendrá lugar al día siguiente de su publicación en el *Boletín Oficial del Estado*.

PROPOSICIÓN DE LEY

Artículo primero. Modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Se modifica el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, añadiendo un nuevo apartado al artículo 55, que queda redactado como sigue.

Artículo 55. Reintegro de prestaciones indebidas.

1. Los trabajadores y las demás personas que hayan percibido indebidamente prestaciones de la Seguridad Social vendrán obligados a reintegrar su importe.

2. Quienes por acción u omisión hayan contribuido a hacer posible la percepción indebida de una prestación responderán subsidiariamente con los perceptores, salvo buena fe probada, de la obligación de reintegrar que se establece en el apartado anterior.

3. La obligación de reintegro del importe de las prestaciones indebidamente percibidas prescribirá a los cuatro años, contados a partir de la fecha de su cobro, o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución, con independencia de la causa que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las prestaciones por error imputable a la entidad gestora.

4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda.

5. No tendrán la consideración de exigibles las prestaciones indebidas recibidas por las personas beneficiarias cuando estas se deban a un error imputable a la administración competente, y la persona beneficiaria no haya contribuido a la percepción indebida mediante actos o hechos contrarios a la buena fe. Tampoco tendrán consideración de exigibles cuando las cantidades percibidas atiendan a necesidades básicas de subsistencia de personas en situación de vulnerabilidad.

Artículo segundo. Modificación de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.

Se modifica el apartado dos del artículo 19 que queda redactado como sigue:

2. Cuando mediante resolución se acuerde la extinción o la modificación de la cuantía de la prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su cálculo y no exista derecho a la prestación o el importe a percibir sea inferior al importe percibido, los beneficiarios de la prestación vendrán obligados a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, mediante el procedimiento establecido en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el que se regula el procedimiento especial para el reintegro de las prestaciones de la Seguridad Social indebidamente percibidas, y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

Serán responsables solidarios del reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas los beneficiarios y todas aquellas personas, , que en virtud de hechos, omisiones, negocios o actos jurídicos participen en la obtención de una prestación de forma fraudulenta.

Quedarán exentas de esta responsabilidad las personas beneficiarias que hayan percibido prestaciones indebidas como consecuencia de un error imputable a la administración competente y que no hayan contribuido a la percepción indebida mediante actos o hechos contrarios a la buena fe. Esta exención se extenderá a los hijos e hijas, personas menores de edad y mayores en situación de vulnerabilidad a cargo de las personas beneficiarias que pudieran considerarse como responsables solidarios.

Serán exigibles a todos los responsables solidarios el principal, los recargos e intereses que deban exigirse a ese primer responsable, y todas las costas que se generen para el cobro de la deuda

Disposición adicional primera. Consideración de persona en situación de vulnerabilidad

Se entenderá que las personas perceptoras se encuentran en situación de vulnerabilidad cuando, en el momento de entrada en vigor de esta Ley, perciban el ingreso mínimo vital, la renta mínima de referencia en su comunidad autónoma, o bien cuando la persona o personas beneficiarias hayan percibido durante el ejercicio del año anterior, unos ingresos inferiores a dos veces el salario mínimo interprofesional anual vigente a 31 de diciembre de ese mismo año.

Disposición adicional segunda. Aplicación sobre reintegros del Ingreso Mínimo Vital

1. Tendrán la consideración de no exigibles para la administración competente las prestaciones reclamadas que no hayan sido reintegradas o se encuentren en periodo de reintegro a la entrada en vigor de esta ley derivadas de la aplicación de la *Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital*, desde su entrada en vigor.

2. A tal efecto, se procederá a la *suspensión de todos expedientes de reintegro de ingreso mínimo vital incoados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social* para su revisión en aplicación de los nuevos requisitos de no exigibilidad.

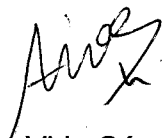
Disposición final. Entrada en vigor

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

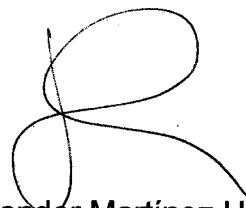
A LA MESA DEL CONGRÉS

A l'empara del que s'estableix en l'article 124 i següents del vigent Reglament de la Cambra, el Grup Parlamentari Plurinacional Sumar, presenta la següent **Proposició de Llei per a la modificació dels requisits d'exigibilitat del reintegrament de prestacions indegudes de la Llei General de la Seguretat Social i la Llei de l'Ingrés Mínim Vital.**

Madrid, Palau del Congrés, a 12 de maig de 2026



Aina Vida Sáez
Portaveu Adjunta



Lander Martínez Hierro
Diputat

ANTECEDENTS

- Constitució Espanyola
- Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei General de la Seguretat Social
- Reial decret 148/1996, de 5 de febrer, pel qual es regula el procediment especial per
al reintegrament de les prestacions de la Seguretat Social indegudament percebudes.
- Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'ingrés mínim vital.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La present proposició de llei té per objecte respondre a una necessitat urgent de reforma dels requisits d'exigibilitat de reintegrament de prestacions indegudes establerts en el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Aquesta mesura ha d'adoptar-se de manera urgent i es justifica en termes de justícia social, atenent la naturalesa de les prestacions socials de caràcter econòmic en l'àmbit dels drets socials i els seus requisits per a accedir a elles; la reclamació del deute, especialment si es tracta d'una gran quantia o pràcticament la totalitat del percebut, pot comportar un empitjorament de la situació de vulnerabilitat de les famílies i persones beneficiàries i, conseqüentment, comprometre la finalitat de la prestació.

A més, aquesta situació de vulnerabilitat de beneficiaris i famílies sol veure's agreujada per la pròpia tramitació dels expedients, ja que en aquests moments les entitats gestores tarden mesos, fins i tot anys, a revisar la prestació i quan ho fan reclamen la devolució de tot el període.

II

La Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'ingrés mínim vital va entrar en vigor amb l'objectiu principal de garantir un nivell mínim d'ingressos a les llars en situació de vulnerabilitat econòmica per a prevenir el risc de pobresa i exclusió social, assegurant una renda mínima als qui manquen de recursos econòmics bàsics, adaptant-se a les circumstàncies de cada unitat de convivència.

Des de la seva implementació, com també ocorre amb altres prestacions no contributives com les pensions d'invalidesa o els subsidis de desocupació de llarga durada, són molts els beneficiaris que mentre percebien la prestació van veure incrementats els seus ingressos, i conseqüentment, van passar en molts casos a superar els mínims establerts per a ser receptors d'aquestes. I en aquest sentit, malgrat estar obligats a informar l'Administració quan rebin nous ingressos i realitzar el tràmit pertinent per a la seva comunicació, les entitats gestores en aplicació del que es disposa en el Reial Decret 148/1996, de 5 de febrer, pel qual es regula el procediment especial per al reintegrament de les prestacions de la Seguretat Social indegudament percebudes, poden trigar mesos, fins i tot anys, a revisar la prestació i quan ho fan reclamen la devolució de tot el període.

En concret, pel que fa a l'Ingrés Mínim Vital les persones beneficiàries de la prestació que van veure modificats els seus ingressos estan sent contactades

perquè retornin el cobrat en els últims anys com a perceptors de l'Ingrés Mínim Vital.

Es tracta de famílies sense recursos i en situació, a vegades, d'extrema necessitat, que van percebre aquesta prestació social, i que tenen serioses dificultats per a fer front a les quantitats que ara se'ls reclamen.

És que recents pronunciaments del Tribunal Europeu de Drets Humans i del Tribunal Suprem consideren que s'ha d'entendre com a desproporcionat reclamar la integritat del cobrat, en concepte de prestacions o ajudes assistencials, quan s'hagi pogut comprovar la bona fe dels beneficiaris o quan l'error hagi estat comès per la pròpia Administració.

La sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) del 26 d'abril de 2018 en el cas Čakarević contra Croàcia estableix que no es pot obligar un ciutadà a retornar prestacions indegudament cobrades per error estatal, si es compleixen uns certs criteris. Aquests criteris són: la bona fe del beneficiari (no coneixia l'error), la naturalesa de la prestació (com la desocupació, que cobreix necessitats bàsiques) i que la devolució suposi una càrrega desproporcionada i individual per a l'afectat.

Aquesta resolució es va argumentar sobre la base de l'article 1 del Protocol Addicional al Conveni Europeu de Drets Humans, que protegeix el dret al gaudi pacífic dels béns, i l'obligació a la persona beneficiària a retornar la totalitat de les prestacions va ser considerat una càrrega excessiva, i buscant un equilibri just entre l'interès general i el dret de propietat individual, sense que l'obligació de retornar una prestació indeguda resulti en cap cas desproporcionat.

Aquesta mateixa doctrina ha estat aplicada pel Tribunal Suprem, sala social en casos de pagaments indeguts de prestacions, com el dels treballadors en ERTA per COVID, STS 2072/2024 i STS 2341/2024.

S'ha de tenir en consideració que les actuals mancances i dèficits del sistema de reclamació dels pagaments indeguts pel que fa a la seva tramitació per part de les entitats gestores i l'administració, i l'exigència de devolució de tota la prestació percebuda per persones i unitats de convivència vulnerables o en risc d'exclusió podria també entrar en contradicció amb el que es disposa en els articles 13.1, 15.3, 16, 17, 30 i 31 de la Carta Social Europea.

Finalment, una altra de les anomalies que havien de corregir-se en coherència amb l'anteriorment exposat és la possible consideració de responsables solidaris en el cas de les prestacions indegudes als fills i filles, menors a càrrec o persones en situació de vulnerabilitat que formen part de la unitat familiar de les persones beneficiàries per la prestació de l'Ingrés Mínim Vital. És que amb el redactat vigent l'article 19.2 de la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'ingrés mínim vital, queden incloses totes les persones que en virtut de fets, omissions,

negocis o actes jurídics participin en l'obtenció d'una prestació de manera fraudulenta.

Aquest fet ha donat lloc, de facto, a un deute heretat pels fills menors, amb l'agreujant de què es tracta d'unitats familiars en situació de vulnerabilitat, entrant a més en contradicció amb l'actual doctrina del Tribunal Suprem establerta en resolucions com la STS de 25/03/2021 Rec. cas. 3172/2019 reiterat en STS de 18/06/2021 Rec. cas. 2188/2020), on resol no cal exigir la responsabilitat solidària prevista en l'article 42.2.a) LGT a un menor d'edat en els supòsits en què l'actuació que se li imputi sigui com a causant o col·laborador en l'ocultació o transmissió de béns, o resolucions com la de la Sala Tercera, del Contenciós Administratiu, Sec. 2a, 1640/2022, de 13 de desembre. Recurs 404/2021 o la de la Sala Tercera, del Contenciós-Administratiu, Sec. 4a, 989/2023, de 13 de juliol. Recurs 6662/2022.

Però la realitat és que malgrat la doctrina aplicable encara són molts els casos en què l'administració ha considerat als fills i menors a càrrec que formen part de la unitat familiar com a responsables solidaris del reintegrament de la prestació indeguda en el cas de l'Ingrés Mínim Vital, agreujant així la situació d'aquestes famílies que a vegades acaben per acudir a la justícia.

III

La present proposició de llei s'estructura en dos articles, una disposició addicional, una disposició addicional segona i una disposició final.

L'article primer modifica l'article 55 del reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, afegint un punt 5 en el qual s'estableixen els requisits de no exigibilitat de les prestacions rebudes, d'acord amb la realitat exposada en l'exposició de motius i la doctrina establerta pel Tribunal Europeu de Drets Humans i el Tribunal Suprem.

L'article segon modifica l'article 19.2 de la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'ingrés mínim vital, per a establir, tal com ens marca l'actual doctrina del Tribunal Suprem, de manera clara i inequívoca que en cap cas els fills menors o a càrrec, podran ser considerats com a responsables solidaris del reintegrament de prestacions indegudes.

La disposició addicional primera estableix els criteris de consideració de persona en situació de vulnerabilitat per a la posterior aplicació del que s'estableix en aquesta llei.

La disposició addicional segona s'introdueix per a resoldre la problemàtica referent a les prestacions reclamades a persones beneficiàries de l'Ingrés Mínim Vital, convertint de facto en no exigibles totes aquelles prestacions reclamades en aplicació de la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'ingrés

mínim vital, que a la data d'entrada vigor de la Llei no s'hagin reintegrat o es trobin en procediment de reintegrament per part de l'administració.

Finalment, la disposició final segona regula l'entrada en vigor de la llei, que tindrà lloc l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

PROPOSICIÓ DE LLEI

Article primer. Modificació del reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Es modifica el reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, afegint un nou apartat a l'article 55, que queda redactat com segueix.

Article 55. Reintegrament de prestacions indegudes.

1. Els treballadors i les altres persones que hagin percebut indegudament prestacions de la Seguretat Social vindran obligats a reintegrar el seu import.
2. Els qui per acció o omissió hagin contribuït a fer possible la percepció indeguda d'una prestació respondran subsidiàriament amb els perceptors, excepte bona fe provada, de l'obligació de reintegrar que s'estableix en l'apartat anterior.
3. L'obligació de reintegrament de l'import de les prestacions indegudament percebudes prescriurà als quatre anys, comptats a partir de la data del seu cobrament, o des que va ser possible exercitar l'acció per a exigir la seva devolució, amb independència de la causa que va originar la percepció indeguda, inclosos els supòsits de revisió de les prestacions per error imputable a l'entitat gestora.
4. El que es disposa en aquest article s'entén sense perjudici de la responsabilitat administrativa o penal que legalment correspongui.
5. **No tindran la consideració d'exigibles les prestacions indegudes rebudes per les persones beneficiàries quan aquestes es deguin a un error imputable a l'administració competent, i la persona beneficiària no hagi contribuït a la percepció indeguda mitjançant actes o fets contraris a la bona fe. Tampoc tindran consideració d'exigibles quan les quantitats percebudes atenguin necessitats bàsiques de subsistència de persones en situació de vulnerabilitat.**

Article segon. Modificació de la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'ingrés mínim vital.

Es modifica l'apartat dos de l'article 19 que queda redactat com segueix:

2. Quan mitjançant resolució s'acordi l'extinció o la modificació de la quantia de la prestació a conseqüència d'un canvi en les circumstàncies que van determinar el seu càlcul i no existeixi dret a la prestació o l'import a percebre sigui inferior a l'import percebut, els beneficiaris de la prestació vindran obligats a reintegrar les quantitats indegudament percebudes, mitjançant el procediment establert en el Reial decret 148/1996, de 5 de febrer, pel qual es regula el procediment especial per al reintegrament de les prestacions de la Seguretat Social indegudament percebudes, i en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny.

Seràn responsables solidaris del reintegrament de les prestacions indegudament percebudes els beneficiaris i totes aquelles persones, , que en virtut de fets, omissions, negocis o actes jurídics participin en l'obtenció d'una prestació de manera fraudulenta.

Quedaran exemptes d'aquesta responsabilitat les persones beneficiàries que hagin percebut prestacions indegudes a conseqüència d'un error imputable a l'administració competent i que no hagin contribuït a la percepció indeguda mitjançant actes o fets contraris a la bona fe. Aquesta exempció s'estendrà als fills i filles, persones menors d'edat i majors en situació de vulnerabilitat a càrrec de les persones beneficiàries que poguessin considerar-se com a responsables solidaris.

Seràn exigibles a tots els responsables solidaris el principal, els recàrrecs i interessos que hagin d'exigir-se a aquest primer responsable, i totes les costes que es generin per al cobrament del deute

Disposició addicional primera. Consideració de persona en situació de vulnerabilitat

S'entendrà que les persones perceptores es troben en situació de vulnerabilitat quan, en el moment d'entrada en vigor d'aquesta Llei, percebin l'ingrés mínim vital, la renda mínima de referència en la seva comunitat autònoma, o bé quan la persona o persones beneficiàries hagin percebut durant l'exercici de l'any anterior, uns ingressos inferiors a dues vegades el salari mínim interprofessional anual vigent a 31 de desembre d'aquest mateix any.

Disposició addicional segona. Aplicació sobre reintegraments de l'Ingrés Mínim Vital

1. Tindran la consideració de no exigibles per a l'administració competent les prestacions reclamades que no hagin estat reintegrades o es trobin en període de reintegrament a l'entrada en vigor d'aquesta llei derivades de l'aplicació de la Llei 19/2021, de 20 de desembre, per la qual s'estableix l'ingrés mínim vital, des de la seva entrada en vigor.

2. A aquest efecte, es procedirà a la suspensió de tots expedients de reintegrament d'ingrés mínim vital incoats per l'Institut Nacional de la Seguretat Social per a la seva revisió en aplicació dels nous requisits de no exigibilitat.

Disposició final. Entrada en vigor

La present Llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.